



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL
DE GOBERNANZA PÚBLICA

Expediente: 001-011148

Nombre: [REDACTED]

NIF: [REDACTED]

Correo electrónico: [REDACTED]

Con fecha de 16 de enero de 2017 tuvieron entrada en la Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales-Presidencia del Gobierno, solicitudes de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentadas por [REDACTED], solicitudes que, con un contenido idéntico, quedaron registradas con los respectivos números 001-011146 y 001-011148:

“SILENCIO ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO TORRELODONES DEMANDA POR INJURIAS DE FECHA 3-10-2016”

Con fecha de 24 de enero de 2017 estas solicitudes se recibieron en la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

De acuerdo con la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando estén dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información.

Una vez analizadas las solicitudes, la Directora General de Gobernanza Pública considera que las mismas incurren en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que la información que se solicita no se encuentra en la Administración General del Estado.



En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra d) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmiten a trámite las solicitudes de acceso a la información pública que han quedado identificadas en el párrafo primero de esta resolución.

A juicio de esta Dirección General de Gobernanza Pública, sería el Ayuntamiento de Torreloredones (Madrid) el órgano competente para conocer las solicitudes de acceso a la información que se inadmiten mediante la presente resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

La Directora General de Gobernanza Pública

María Pía Junquera Temprano